



## **SALVAMENTO DE VOTO**

Medellín, diez de abril de dos mil veintitrés

Ref.: Exp.: 05001 31 03 012 2021 00057 01

Procedimiento: Ejecutivo  
Demandante: C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A  
Demandados: AGROPECUARIAS BANANERAS S.A.S. y otros

El suscrito presentó ante la Sala ponencia de fondo, encontrando, de conformidad con las pruebas practicadas que el supuesto del artículo 278.2 se encontraba satisfecho. Esta posición no fue compartida por la Sala mayoritaria al encontrar que existían pruebas pendientes para practicar y argumentándose que debía salvaguardarse *“los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y necesidad de la prueba”*.

No puedo compartir la nueva ponencia por estas razones:

- Consideraciones sobre debido proceso han sido esbozadas en la providencia de 10 de abril del presente año, que revoca la sentencia anticipada calendada 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. Se ofrecen motivos que solo se pueden exponer a partir de la figura de la nulidad procesal, la que justo debió ordenarse mediante auto por el nuevo ponente, pero jamás dictar sentencia.

La Sala mayoritaria encontró como un defecto significativo el hecho de que *“en el ejercicio de contradicción”* el demandado hubiese solicitado pruebas, entre las que se destaca el interrogatorio de la contraparte. Se indica que *“hubo medios probatorios oportunamente solicitados, de los que sumariamente se advierte su conducencia, pertinencia y utilidad, razón por la cual deberán ser recandados”*.

La nueva ponencia no corresponde a una sentencia, sino más bien a un auto en el que se invocan razones de forma y el que en ningún momento puede ser de decisión colegiada. La pretensión de salvaguardar el debido proceso, más bien, imponía que el nuevo ponente declarara la nulidad procesal, claro está, acatando las etapas de este trámite de especial. No puedo aceptar que se “revoque” una sentencia sin que se haya explicado por qué la juez no podía dictar válidamente sentencia anticipada bajo el supuesto del artículo 278, numeral 2, ya que en ningún momento comprometió el derecho de las partes a probar los hechos expuestos en el marco del trámite de excepciones.

- Vale precisar que, según el artículo 137 del CGP el trámite para declarar una nulidad en segunda instancia supone ponerla en conocimiento de la parte para que esta la alegue, a no ser que se considere que al momento de recurrir hubo una alegación expresa. Si la causa es la contemplada en el artículo 133.5, sobre la omisión de las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, ese trámite hay que respetarlo, lo impide que de forma oficiosa se invalide sin hacer un juicio claro sobre las condiciones del caso concreto.

Así, es indispensable que haya alegación ante el *a quem*, mediante petición de nulidad, por vicio originado en la propia sentencia; o que exista petición de invalidez en los motivos de reparo de la impugnación. Si no están satisfechos esos requerimientos, que son de ley, el único camino que queda es dictar

sentencia de fondo, con base en los reparos concretos presentados por la recurrente.

Como esto no ha sucedido, no puedo acompañar la sentencia votada mayoritariamente.

- Precisión final: No obstante, como la decisión de la mayoría impone dictar una nueva sentencia bajo la condición que agote pruebas pendientes, haciéndose énfasis en el interrogatorio de parte, pese a mi insistencia de haberse dado los supuestos artículo 278.2, respeto la voluntad de la mayoría y pienso que este nuevo trámite impone que el juez dicte una sentencia bajo la condición de que agote prueba de forma útil, y no simplemente, para cumplir la orden del superior sin más. Es por esto que la juez deberá hacer todas las indagaciones correspondientes a las circunstancias que rodearon el llenado del pagaré de conformidad con la carta de instrucciones; confrontará en la nueva prueba, cotejando documentos adosados, las razones sobre las fechas de creación y vencimiento, en aras a establecer la posibilidad de acelerar el plazo de obligaciones sometidas a cuotas periódicas para su pago ante la mora; establecerá con la prueba pendiente en qué consistió la causa de las obligaciones que finalmente se incorporaron en el instrumento de crédito, diferenciando cuáles se podía incluir y cuáles no; finalmente, dilucidará lo correspondiente a intereses y pagos. Todo dentro del marco de las excepciones propuestas.

Atentamente,



**MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ**

**Magistrado**